

ASUNTO: Acuerdo que clasifica como información reservada: **La demanda y demás constancias que deriven del Juicio de Nulidad TJA-418/2023-A.**

Colima, Colima, a las 16:00 horas del día 04 de marzo del año 2024 dos mil veinticuatro.

LIC. ALONSO LOZANO JUÁREZ, Director Jurídico Contencioso de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 26 fracción I, 28 fracción VI, 110 párrafo 1, 111, 112, 113, 114, 116 fracción VIII y 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; así como los numerales **Séptimo** fracción I, y **Trigésimo** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se emite el siguiente Acuerdo de Clasificación de información reservada en atención a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El día 01 de marzo del año 2024, la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado turnó para conocimiento y atención, en su caso, la solicitud de información con número de folio **061904024000005** del peticionario cuyo seudónimo fue **"Superman"**, recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la que se requiere la siguiente información:

061904024000005: Solicito el status y los alcances planteados de la demanda para la nulidad del contrato de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales COLIMA- VILLA DE ÁLVAREZ. Misma que fue informada a través de los medios periodísticos y de noticias AF Medios en el año 2023. Requiero así mismo, versión pública de la demanda señalada.

2. Analizada la información objeto de la solicitud, se da cuenta de que esta Dirección Jurídica Contenciosa posee la información, toda vez que, con fundamento en los artículos 30, 41 fracciones IX y XII, y 42 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, así como los artículos 1, 8 fracción XVIII, y 18 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; es facultad de esta dependencia representar jurídicamente a la persona titular del Poder Ejecutivo para cualquier clase de juicio o asunto en que intervenga o deba intervenir, así como solicitar a las dependencias y entidades la información o el apoyo que se necesite para cumplir adecuadamente con la facultad de representación jurídica.

Es entonces que, en el ejercicio de dichas atribuciones, bajo la encomienda de velar por el adecuado manejo administrativo, financiero, operativo y jurídico de la Administración Pública Estatal, esta Consejería Jurídica en nombre y representación de la persona titular del Poder Ejecutivo, promovió Juicio de Nulidad ante el Tribunal

de Justicia Administrativa con fecha 09 de marzo del año 2023, en contra de la empresa denominada "ECOSISTEMA DE COLIMA, S.A DE C.V." y otros, asignándosele el número de expediente **TJA-418/2023-A** mediante Acuerdo emitido por el Tribunal de fecha 15 de marzo de 2023 y notificado a esta dependencia el día 30 de los mismos, sin que hasta la fecha obre sentencia o resolución que ponga fin al juicio en comento.

3. En esa tesitura, de la solicitud de información **061904024000005**, se desprende que se está requiriendo versión pública de la demanda correspondiente, sin que exista ninguna versión pública de la misma por continuar en trámite el juicio aludido, y, a su vez, requiere los alcances planteados en la misma, lo cual, a consideración de esta Dirección, tampoco puede informarse, debido a que no se ha causado estado y su socialización podría vulnerar la conducción del expediente judicial actualmente en trámite. Por lo anterior, se clasifica como información reservada lo anterior planteado, en atención a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo tercero que *"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."* Lo que obliga, en el supuesto que nos ocupa, al sujeto obligado Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado como autoridad, a realizar una interpretación conforme de la ley, preservando en todo momento el principio *pro persona*.
2. Que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su segundo párrafo que *"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión."* Y, con relación a sus fracciones I y II de su inciso A, establecen que ese derecho de acceso a la información, tiene como excepción la reserva temporal de información en virtud del interés público, de la vida privada y los datos personales;
3. Que la fracción IV, del artículo 2º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece el derecho al libre acceso a información plural y oportuna;
4. Por su parte, el Artículo 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima refiere que *"El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por la presente Ley, de acuerdo a las normas que se plantean para el tratamiento de la información reservada y la confidencial. Los sujetos obligados deberán dictar las determinaciones necesarias para la protección de los datos personales que se encuentren en los documentos que tengan bajo su control y resguardo."*

5. Así mismo, el artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, prevé que los sujetos obligados deberán resolver respecto del carácter reservado o confidencial de la información que obre en su poder. A su vez, continúa señalando en su artículo 111 que, en el caso de reservar de información, esta deberá encontrarse debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño correspondiente.

6. En ese estado de cosas, tengo a bien emitir el siguiente Acuerdo, en cuya distribución se atiende lo establecido por el artículo 113 de la Ley de la materia.

ACUERDO

PRIMERO. – FUENTE. En vías de atender la solicitud de información con número de folio **061904024000005**, el suscrito, como titular de la Dirección Jurídica Contenciosa, área poseedora de la información objeto de la solicitud que nos ocupa, acuerda clasificar como información reservada la documentación consistente en:

UNICO. La demanda y demás constancias que deriven del Juicio de Nulidad TJA-418/2023-A.

Documentación que forma parte de las actuaciones y constancias de un juicio actualmente en trámite, lo cual actualiza una de las hipótesis por lo que cierta información puede clasificarse como reservada, en virtud de que su divulgación pudiese vulnerar la conducción del expediente judicial **TJA-418/2023-A** relativo al Juicio de Nulidad interpuesto ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, en nombre y representación de la titular del Poder Ejecutivo del Estado.

SEGUNDO. – JUSTIFICACIÓN. La solicitud de información que da origen al presente Acuerdo, requiere de esta Consejería Jurídica, entre otras cosas, el escrito de demanda por el que se establecen los hechos, pretensiones y medios de prueba utilizados para dar soporte a los planteamientos formulados ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Ahora bien, el solicitante refiere en su texto que requiere el escrito de demanda en versión pública, sin embargo, vale la pena aclarar que las versiones públicas operan solo cuando el “documento público” contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, lo cual, en el caso en concreto no es susceptible de realizarse así, pues el documento que el solicitante requiere no está catalogado como público, en virtud de pertenecer a constancias de un juicio que actualmente se encuentra en trámite, por lo que la reserva o confidencialidad no opera solo es una sección, sino en todo el documento, hasta en tanto no cause estado la resolución que ponga fin al juicio.

En ese sentido, vale la pena referir que, de conformidad con el artículo 116. fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, es susceptible de ser reservada la siguiente información:

Artículo 116.-

[...]

En todo caso, el acuerdo correspondiente deberá fundar y motivar la reserva, a través de la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 111 de esta ley, cuando la publicación de la información actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

[...]

VIII. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

[...]

Asimismo, el numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, establece que podrá considerarse como información reservada, la siguiente:

Trigésimo. *De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:*

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que ocurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

Pues bien, como se ha mencionado en párrafos anteriores, el Poder Ejecutivo del Estado de Colima fungiendo como parte promovente en el Juicio de Nulidad multirreferido, presentó demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa el día 09 de marzo del año 2023; dicho escrito inicial fue admitido mediante acuerdo de fecha 15 de marzo del mismo año, asignándosele el número de expediente **TJA-418/2023-A**.

Atentos a lo que señala el numeral Trigésimo arriba citado, es evidente que en el caso que nos ocupa se cumplen los extremos de la existencia de un juicio en trámite, específicamente, un Juicio de Nulidad en vía contenciosa administrativa, por medio del cual se dará cumplimiento a las formalidades de su procedimiento, toda vez que se

cuenta con una norma vigente que regula ese tipo de juicios, a saber, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

Ahora bien, este Sujeto Obligado considera que entregar la información que el presente Acuerdo pretende reservar, vulneraría la conducción del expediente **TJA-418/2023-A** actualmente en trámite, en virtud de que tal escrito de demanda contiene los hechos y las pretensiones con las que se busca atender el asunto en concreto, así como los criterios, argumentos y razonamientos plasmados con los que se pretende sustentar los dichos y objetivos del Juicio de Nulidad, sin embargo, vale la pena resaltar que tales razonamientos deberán ser calificados y resueltos por las autoridades jurisdiccionales, y es hasta ese momento cuando la información adquiere la naturaleza pública, pues las pretensiones y razonamientos invocados en las etapas procesales no quedan en un estado de suspenso, sino que ya se estaría frente a una determinación definitiva.

Es pues que, ante la existencia de una posible afectación al debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a determinado que, el derecho de acceso a la información, como muchos otros derechos, no es absoluto, sino que su ejercicio está acotado a diversas causas e intereses relevantes que amenacen el interés público, la vida privada, los datos personales, entre otros. A continuación, se transcribe el criterio:

Registro digital: 2000234

INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

*Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información **puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales.** Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: **el de información confidencial y el de información reservada.** En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control*

migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

Es por lo anterior, que esta Dirección Jurídica Contenciosa de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado tiene el deber de clasificar como reservada la información requerida mediante la solicitud de folio **061904024000005**.

TERCERO. - PRUEBA DE DAÑO. El artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, constriñe a la aplicación de la prueba de daño para fundamentar la reserva de la información que este acuerdo plantea. A su vez, el numeral 111 explica los objetivos de dicha prueba:

***Artículo 111.-** La prueba de daño a que se refiere el artículo anterior tendrá como objetivo justificar que de divulgarse la información se generaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo para el interés público; que el riesgo de entregar la información es mayor que las ventajas de su difusión y que la medida representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio que se causaría con la entrega de la información.*
[...]

Así pues, derivado de las razones y fundamentos por las que se estima se actualiza la causal de reserva de la información transcrita en los párrafos precedentes, se considera la existencia de un **riesgo**:

Real: De conformidad con lo establecido en la fracción XII del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, así como la fracción XVIII del artículo 8 del Reglamento de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en donde se establece que es facultad de la persona titular de la dependencia:

Representar jurídicamente a la persona titular del Poder Ejecutivo en cualquier juicio o asunto en que ésta intervenga o deba intervenir con cualquier carácter, así como en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La

representación a que se refiere esta fracción comprende la interposición y el desahogo de todo tipo de recursos, pruebas, alegatos y actos que favorezcan los intereses y derechos de la representada y del Estado. Esta facultad podrá ser delegada en términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica;

Es entonces que, con fecha 09 de marzo del año 2023, se presentó formal demanda por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, en nombre y representación de la Gobernadora Constitucional del Estado, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en contra de la empresa denominada "ECOSISTEMA DE COLIMA, S.A DE C.V." y otros, asignándosele el número de expediente **TJA-418/2023-A** mediante Acuerdo emitido por el Tribunal de fecha 15 de marzo de 2023 y notificado a esta dependencia el día 30 de los mismos; tal escrito de demanda con el objetivo de iniciar un Juicio de Nulidad, a través de la vía contenciosa administrativa.

En ese sentido, se actualiza un riesgo real en la entrega de la información solicitada, en virtud de que tal Juicio de Nulidad continúa en trámite, sin que siquiera haya sido turnado para sentencia definitiva, por lo que entregar el escrito de demanda o cualquier otra constancia que obre en el juicio, sin que este haya causado estado, puede ocasionar un daño a las partes, en el sentido de afectar sus defensas, dejar en descubierto una estrategia legal o afectar la decisión imparcial del juzgador que pudiera verse influido por los comentarios o posiciones que pudiesen suscitarse con motivo de la información privilegiada allegada, así como violar el derecho que tienen las partes de gozar de un debido proceso con el más alto respeto a los principios que rigen la impartición de justicia.

Identificable: El hecho de que esta Dirección Jurídica Contenciosa entregue el escrito de demanda solicitado, en el cual se establecen los hechos y las pretensiones con las que se busca atender el asunto en concreto, así como los criterios, argumentos y razonamientos plasmados con los que se pretende sustentar los dichos y objetivos del Juicio de Nulidad, acarrearía el riesgo del desequilibrio procesal y con él, el riesgo de trastocar el orden público, ya que la impartición de justicia dejaría de ser neutra. En ese orden de ideas, si este Sujeto Obligado apertura la información solicitada, estaría contraviniendo las disposiciones de la regulación en materia de transparencia, puesto que, como ya se ha señalado, la información objeto de la solicitud **061904024000005** consta en una documental que forma parte de las constancias de un juicio en trámite y su entrega acarrearía perjuicio significativo al interés público, al generar condiciones en la opinión pública o política que pudieran influir en la decisión del juzgador volviéndola parcial y con ello también trasgredir el derecho al debido proceso que el propio operador de justicia debe resguardar por mandato constitucional.

Demostrable: Es un hecho conocido y fácilmente comprobable la existencia del Juicio de Nulidad interpuesto en la fecha multirreferida, pues tal noticia fue comunicada a la población Colimense, tal como lo refiere el propio solicitante en su solicitud de información. De tal forma que es posible también demostrar los fines por los cuales se interpuso el actual procedimiento contencioso administrativo y la necesidad de su sustanciación, acompañado del cúmulo de documentales que ayuden a justificar y comprobar los hechos controvertidos y dar soporte a los argumentos formulados. Por lo que, al tratarse de un juicio en trámite, es también palpable el riesgo que pudiese existir de ventilar constancias o información inmersa en dicho procedimiento, así como la

inestabilidad del orden público que pudiese suscitarse por tratarse de una materia que a lo largo de los años se ha regulado en pro de la transparencia en sus procedimientos.

De lo anterior se sigue que, el riesgo de perjuicio supera el interés público, pues en términos del artículo Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, para que se verifique el supuesto de reserva, debe actualizarse la existencia de un juicio en trámite y que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. Al respecto, la información requerida versa en el escrito de demanda interpuesto por este Sujeto Obligado, el cual obra como constancias mismas del Juicio actualmente en trámite, por lo que se colman dichos elementos.

Por su parte, el presente Acuerdo de reserva representa el medio menos restrictivo del derecho a la información, y, de hecho, el único posible en el caso concreto. Situación respecto de la cual, la Ley en materia de transparencia es clara en permitir que la información se reserve, pues estamos ante una cuestión de interés público que tiene que ver con la protección del derecho de las partes al debido proceso y de contar con un juez imparcial que dirima la cuestión sometida a juicio.

CUARTO. – Tipo de reserva. Es pertinente la reserva total de:

UNICO. La demanda y demás constancias que deriven del Juicio de Nulidad TJA-418/2023-A.

Lo anterior en virtud de que tal documental forma parte de los autos de un Juicio de Nulidad en trámite.

QUINTO. - Plazo de reserva: La documentación señalada en el Acuerdo Cuarto de este documento tendrá el carácter de reservado hasta que el Juicio de Nulidad con número de expediente TJA-418/2023-A se encuentre concluido, es decir, **hasta el momento en que exista una sentencia y se determine la firmeza de ésta.**

SEXTO. – Autoridad responsable de su conservación: Será responsable del resguardo y protección de la información reservada la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, así como cualquier otra Dependencia que se encuentre vinculada con el archivo, resguardo o ejecución, por lo que en los términos del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, se deberá disponer lo necesario a efectos de que los documentos reservados sean debidamente custodiados y conservados, debiendo observar los lineamientos que expida el Sistema Nacional de Transparencia.

Atentamente

Colima, Colima a 04 de marzo del año 2023


LIC. ALONSO LOZANO JUÁREZ

Director Jurídico Contencioso
de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima